

Plaza pública

para la edición del 19 de mayo de 1995

Desempleo

Miguel Ángel Granados Chapa

Para colmo, además de los estragos que el pésimo manejo gubernamental de la economía asesta a la población mexicana, más de doce millones de personas padecen la peor sequía de la historia mexicana reciente. Hectáreas enteras reseca (unas doscientas cincuenta mil, en los estados fronterizos del norte, así como en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí) significan miles de personas sin la ocupación mínima que requieren para sobrevivir (pues ya han dejado de producirse mil quinientas toneladas de alimentos).

Por fortuna, alguien que seguramente habrá enfrentado y superado la acusación de populista o (en el menos peor de los casos) keynesiano, que los neoliberales monetaristas que mandan en la economía lanzan como dardo contra sus enemigos, ha logrado fondos para que la Comisión Nacional del Agua mitigue los efectos de ese desempleo. Se financiará el importe de 235 mil jornales que servirán para mejorar las condiciones de los sistemas de riego. Es poco: menos del diez por ciento de los dos millones y medio de jornales que se han perdido por esa emergencia climática. Pero es algo. Y nada, aunque sea de talla menor, debe dejar de hacerse para impedir la peor mutilación que puede sufrir un ser humano, que es la de perder su trabajo.

El otro desempleo, no el causado por las inclemencias del tiempo, sino por las de un sistema económico que no tiene al ser humano en el centro de sus preocupaciones, corre ya desenfrenado. El propio **Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz**, a quien con toda evidencia importan más las cifras que las personas, ha anunciado que la prioridad del gobierno, en este momento, será frenar la creciente desocupación. Sin embargo, al mismo tiempo ha prevenido a todos que lo peor de la crisis está todavía por llegar, y que en julio y agosto (el ardiente verano) conoceremos las mayores tasas de desempleo. Ya ahora son abrumadoras. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, llega a un porcentaje del 5.7 por ciento de la población económicamente activa, pero todo el mundo, por prejuicio o a sabiendas, tiene desacuerdos con esa cifra, pues la considera mayor.

El gobierno estudia un mecanismo no tanto para fomentar el empleo, sino al menos para evitar que empresas pequeñas y medianas se deshagan de personal como quien tira lastre. El plan parte de un crédito del Banco Mundial, cuyos fondos permitirán no dar crédito a las unidades productivas en dificultades, pues no podrían pagarlo, sino asociar al Estado con tales empresas, en asociaciones de riesgo compartido. Igualmente se considera la posibilidad de romper el círculo perverso que mata los afanes productivos por los costos excesivos del dinero y la cartera vencida. Los constructores endeudados con la banca, por ejemplo, podrían pagar en especie, es decir realizar obra pública

con la que redimirían sus créditos, y el problema se transformaría en una relación financiera entre los bancos y el gobierno, que puede enfrentarse de modos que no afecten la capacidad productiva de la industria de la construcción.

La clave de ese género de soluciones, sin embargo, choca contra los dogmas y las obligaciones impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos. Conforme a los contratos suscritos con el FMI y la Casa Blanca, la economía mexicana ha quedado sujeta a interdicción. Es decir, así como en el juicio civil de esa naturaleza se impide que una persona pródiga dilapide sus recursos, y se le pone un curador que modere sus impulsos, al gobierno mexicano se le exige que no rompa las reglas de la austeridad que conduce a la recesión. De allí que triunfalmente el gobierno se ufane del superávit fiscal que ha conseguido mientras que en la economía real todo el mundo se truena los dedos como señal de preocupación creciente.

Dentro del gabinete se libra una batalla entre los ortodoxos que desean llevar el programa recesivo a consecuencias aun mayores que las actuales, y quienes saben de la necesidad premiosa de activar la economía. En ese punto, con este sector del gobierno coinciden todos los sectores productivos, comenzando por las cámaras de comercio e industria, presas entre su inclinación mecánica a apoyar al gobierno y su urgencia de ver reactivados los negocios de sus miembros.

Si bien el propio Presidente de la República se adhiere a la causa de los recesionistas, optar por un

programa que aliente a la economía, así sea gradualmente, no sólo paliará la gravedad de la crisis y disminuirá el riesgo de estallido social, sino que de paso le servirá para dirimir otra querrela interna. Luego de que el ex presidente Salinas quemó al Pronasol al irse a refugiar a un comité de Solidaridad en San Bernabé, en Monterrey, pareció inevitable la desaparición de ese programa. Pero prescindir de ese mecanismo para orientar el gasto social, en este momento tendría resultados criminales. Por eso se ha resuelto modificar el nombre y aun el emblema de Solidaridad, pero su método de trabajo, que implica la participación de la gente en proyectos comunitarios, será mantenido, lo mismo que su financiamiento.

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Desempleo

Solidaridad no desaparecerá, aunque el ex Presidente Salinas haya envenenado ese programa. Cambiará de nombre y aun de emblema, pero se mantendrá como mecanismo de gasto social en nuevas áreas, como la preservación del empleo.



PARA COLMO, ADEMÁS DE LOS ESTRAGOS QUE EL pésimo manejo gubernamental de la economía asesta a la población mexicana, más de doce millones de personas padecen la peor sequía de la historia mexicana reciente.

Hectáreas enteras resacas (unas docenas cincuenta mil, en los estados fronterizos del norte, así como en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí) significan miles de personas sin la ocupación mínima que requieren para sobrevivir (pues ya han dejado de producirse mil quinientas toneladas de alimentos).

Por fortuna, alguien que seguramente habrá enfrentado y superado la acusación de populista o keynesiano (que los neoliberales monetaristas que mandan en la economía lanzan como dardo contra sus enemigos), ha logrado fondos para que la Comisión Nacional del Agua mitigue los efectos de ese desempleo.

Se financiará el importe de 235 mil jornales que servirán para mejorar las condiciones de los sistemas de riego. Es poco: menos del diez por ciento de los dos millones y medio de jornales que se han perdido por esa emergencia climática. Pero es algo. Y nada, aunque sea de talla menor, debe dejar de hacerse para impedir la peor mutilación que puede sufrir un ser humano, que es la de perder su trabajo.

El otro desempleo, no el causado por las inclemencias del tiempo, sino por las de un sistema económico que no tiene al ser humano en el centro de sus preocupaciones, corre ya desenfrenado. El propio secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, a quien con toda evidencia importan más las cifras que las personas, ha anunciado que la prioridad del gobierno, en este momento, será frenar la creciente desocupación. Sin embargo, al mismo tiempo ha prevenido a todos que lo peor de la crisis está todavía por llegar, y que en julio y agosto (el ardiente verano) conoceremos las mayores tasas de desempleo. Ya ahora son abrumadoras. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, llega a un porcentaje del 5.7 por ciento de la población económicamente activa, pero todo el mundo, por prejuicio o a sabiendas, tiene desacuer-

dos con esa cifra, pues la considera menor que la real.

El gobierno estudia un mecanismo no tanto para fomentar el empleo, sino al menos para evitar que empresas pequeñas y medianas se deshagan de personal como quien tira lastre. El plan parte de un crédito del Banco Mundial, cuyos fondos permitirán no dar crédito a las unidades productivas en dificultades, pues no podrían pagarlo, sino vincular al Estado con tales empresas, en asociaciones de riesgo compartido.

Igualmente se considera la posibilidad de romper el círculo perverso que mata los afanes productivos por los costos excesivos del dinero y la cartera vencida. Los constructores endeudados con la banca, por ejemplo, podrían pagar en especie, es decir realizar obra pública con la que redimirían sus créditos, y el problema se transformaría en una relación financiera entre los bancos y el gobierno, que puede enfrentarse de modos que no afecten la capacidad productiva de la industria de la construcción.

La clave de ese género de soluciones, sin embargo, choca contra los dogmas y las obligaciones impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos, pues implica activar y no inhibir la actividad productiva. Conforme a los con-



El secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, a quien con toda evidencia impor-

tan más los números que las personas, ha anunciado que el desempleo será peor que el de ahora durante los meses del verano ardiente, julio y agosto.

tratos suscritos con el FMI y la Casa Blanca la economía mexicana ha quedado sujeta a la interdicción. Es decir, así como en el juicio civil de esa naturaleza se impide que una persona pródiga dilapide sus recursos, y se le pone un curador que modere sus impulsos, al gobierno mexicano se le exige que no rompa las reglas de la austeridad que conduce a la recesión. De allí que triunfalmente el gobierno se ufane del superávit fiscal que ha conseguido mientras que en la economía real todo el mundo se truenan los oídos como señal de preocupación creciente ante su empobrecimiento.

Dentro del gabinete se libra una batalla entre los ortodoxos que desean llevar el programa recesivo a consecuencias aun mayores que las actuales, y quienes saben de la necesidad premiosa de activar la economía.

En ese punto, con este sector del gobierno no coinciden todos los sectores productivos comenzando por las cámaras de comercio e industria, presas entre su inclinación mecánica a apoyar al gobierno y su urgencia de ver reactivados los negocios de sus miembros.

Si bien el propio Presidente de la República se adhiere a la causa de los recesionistas, optar por un programa que aliente a la economía, así sea gradualmente, no sólo paliará la gravedad de la crisis y disminuirá el riesgo de estallido social, sino que de paso le servirá para dirimir otra querrela interna. Luego de que el ex presidente Salinas quemó al Pronasol al irse a refugiar a un comité de Solidaridad en San Bernabé en Monterrey, pareció inevitable la desaparición de ese programa. Pero prescindir de ese mecanismo de gasto social precisamente en este momento, tendría resultados criminales. Por eso se ha resuelto modificar el nombre y aun el emblema de Solidaridad pero su método de trabajo, que implica la participación de la gente en proyectos comunitarios, será mantenido, lo mismo que su financiamiento.

CAJÓN DE SASTRE

Dar de beber al sediento es un mandamiento que debería regir sobre todo entre vecinos, y más aún entre buenos vecinos. Pero el gobernador George Bush, de Texas, rehúsa autorizar el uso de aguas de las presas de La Amistad y Falcón, construidas sobre el río Bravo para aliviar la escasez del líquido en el lado mexicano de la frontera. Pero tiene razón, en el fondo, pues no quiere ser farol de la calle y oscuridad de su casa, es decir, no quiere poner a sus propios consumidores en riesgo de que le falte agua. He allí una lección para quienes se afanan en cumplir con nuestros acreedores extranjeros a costa de la penuria interna.